

2003

DEFINICION DEL GOBIERNO PROVISIONAL DE GUATEMALA ANTE LOS
ULTIMOS ACONTECIMIENTOS POLITICOS DE LA REPUBLICA.-

Hoy 27 de junio de 1954 fué para Guatemala el día mas oprobioso de nuestra historia contemporánea: Roto de antemano el espíritu de la Constitución de la República, se llegó, en el clímax de la demencia política, al aniquilamiento de la letra del mismo instrumento jurídico, mediante una maniobra brutal del grupo de tiranos que, ante el avasallador Movimiento de Liberación Nacional, sólo buscó evadirse al castigo merecido por el crimen hecho institución en nuestra Patria.

En efecto; el presidente comunista Jacobo Arbenz Guzmán renuncia al cargo entregándolo al coronel Carlos Enrique Díaz, Jefe de las Fuerzas Armadas; éste acepta la renuncia y asume el Poder al margen de la Constitución, y un régimen de ignominia y de aprobio continúa en pie, según las propias palabras del nuevo usurpador del Gobierno y deturpador de la voluntad nacional. Incalificable golpe de Estado contra el Congreso por ellos reconocido; contra la Constitución por ellos invocada y contra el pueblo por ellos pretendidamente defendido.

Ante este estado de cosas, que colma la medida de la paciencia pública, nosotros, que formamos por voluntad del pueblo en armas, el Gobierno Provisional de la República, fruto de la rebelión que por ser contra el mal es categórica e indubitable frente de derecho, formulamos las siguientes declaraciones:

Es manifiesta la inconstitucionalidad de procedimiento empleado por el Coronel Jacobo Arbenz Guzman para separarse definitivamente del ejercicio de la Presidencia de la República, porque la fracción primera de el artículo 135 de la Constitución prescribe que: "En caso de falta absoluta del presidente de la república, tomará posesión inmemediata del cargo el presidente del congreso y, en defecto de ésta, o si no reuniere las calidades que esta constitución exige, los vicepresidentes del congreso no llenaren las calidades o tuvieran los impedimentos constitucionales para el ejercicio de la presiden-

cia de la república, entrará a ejercer el cargo el presidente del organismo judicial".

Como el Coronel Carlos Enrique Díaz no es ninguno de los funcionarios taxativamente nombrados como potenciales sucesores, aquel precepto ha sido groseramente violado, al igual que el artículo 115, inciso 5o.-, a cuyo tenor corresponde al Organismo Legislativo "Admitir o no la renuncia que presentare el presidente de la república, quien en tal caso deberá comparecer ante el congreso a ratificar su dimisión ante las dos terceras partes, por lo menos, de sus miembros, reunidos en el salón de sesiones", requisito indispensable para la legalidad del acto, del cual se hizo caso omiso.

Del predicho artículo 115 también se ha vulnerado flagrantemente el inciso 4o.-, porque éste estatuye que es atribución del Congreso, "Recibir la protesta de ley al presidente de la república y darle posesión" extremos que pasáronse por alto en la precipitación del Coronel Carlos Enrique Díaz, para sustituir en las funciones ejecutivas al Coronel Arbenz, fugitivo ante el avance avasallador del Ejército de Liberación Nacional; bien que a aquél, por su condición de Jefe de las Fuerzas Armadas, de ninguna manera podría el congreso investirle de la presidencia de la república, porque el inciso f) del artículo 131 prohíbe que lo sean "Los miembros de la fuerza armada es servicio activo, o que lo hayan estado en los seis meses anteriores, o parte de ellos"; de lo cual se desprende, en consecuencia, vista esta prohibición, que también por esta circunstancia es inconstitucional la detentación del Poder por el Coronel Díaz.

Instituido el Ejército Nacional, entre otros fines, para sostener el cumplimiento de la constitución, -artículo 149- y estando obligado a defenderla, por imperativo de 154 que ordena que, anombre suyo y en el propio, preste juramento el Jefe de la Fuerzas Armadas, al tomar posesión del cargo y anualmente en las primeras sesiones ordinarias legislativas,

ambos preceptos constitucionales han sido transgredidos en la anómala transmisión del Poder Ejecutivo, por virtud de no haberse cumplido con los mandatos de los prenotados artículos 135, 115 y 131, situación que se agrava por la suspensión de los efectos de las normas relativas a la sucesión presidencial, arbitrariamente declarada por el Jefe de las Fuerzas Armadas, Coronel Carlos Enrique Díaz, en abierta pugna con lo estatuido en la fracción tercera del artículo 206, que preceptúa que "En ningún caso podían los artículos 2; 115, inciso llo.; 131, 132; 133; 135; 136 y el presente, ser declarados en suspenso o restárseles en cualquier forma su vigencia y efectividad"

El irrespeto violatorio de la prescripción contenida en el artículo 134, igualmente, vicia de inconstitucionalidad la renuncia del Coronel Arbenz y la sunción del Poder Ejecutivo por el Coronel Díaz, pues que, "Públicamente ante el congreso, el Presidente, al tomar posesión de su cargo, hará la solemne protesta que sigue: "Protesto desempeñar con lealtad el cargo de presidente; observar y hacer que se observe la constitución y prometo, por mi honor, el cumplimiento irrestricto del principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la república". El dimitente, para la entrega del poder, se desentendió de las disposiciones normativas de la materia; y tampoco las acató el Jefe de las Fuerzas Armadas, convertido en usurpador por el sólo hecho de entrar en funciones de Ejecutivo, contra las prescripciones legales y, en dictador por su declaratoria de suspensión de la efectividad de aquellos postulados prescriptivos de la sucesión presidencial.

Evidencia la más vulgar de las irresponsabilidades, la declaración que registra el Coronel Arbenz, en su mensaje al pueblo, la cual dice: "He tomado la grave decisión de abandonar el poder y depositar el mando ejecutivo de la nación en manos del Jefe de las Fuerzas Armadas, Coronel Carlos Enrique Díaz", con esas palabras demuestra, o bien el más absoluto desconocimiento de los imperativos constitucionales y sus de-

beres de gobernante, o su voluntaria falta de respeto a la Constitución.

Ante esta situación que demuestra una vez más el estado de podredumbre política de los hombres que nos han regido y la anarquía jurídica que enloquece al gobierno espurio de los comunistas, hemos de reafirmar nuestra postura que, por los caminos de la santa rebeldía nos conduce a la más auténtica legalidad. Nosotros nos levantamos en armas contra un régimen violatorio de la Constitución. Como quedó probado en el razonamiento jurídico expuesto, ese estado no sólo no terminó con la renuncia de Arbenz sino que se recrudeció hasta la desvergüenza y la infamia. Más alta está la Bandera de la justificada rebeldía en el asta de nuestra propia sangre y en la almoha sagrada de nuestro fecundo sacrificio.

Determinada la situación, estimamos que el Ejército está en el grave deber de rebelarse, secundando nuestra tarea y escuchando nuestros reiterados llamamientos, contra el usurpador Carlos Enrique Díaz, y de sumarse a la rebelión legítima por nosotros iniciada gloriosamente el 16 de junio.

Si el Congreso Nacional estuviese en funciones -no lo está porque nosotros, que integramos el único Gobierno lo hemos disuelto y desconocido- debería actuar, conforme a la Constitución, y pedir el apoyo del Ejército en el fin de restablecer el imperio de la Ley.

Habiendo quedado en suspense las relaciones diplomáticas con el régimen inconstitucional que dice presidir Carlos Enrique Díaz, estimamos que corresponde a los gobiernos de América y del mundo, resolver el reconocimiento del nuevo gobierno de Guatemala. El dilema planteado es claro y contundente: o se inician relaciones en un régimen comunista, torturador y homicida, practicando fervoroso del genocidio; violador de los derechos humanos más elementales; provocador de la discordia internacional; deturpador de la Persona Humana; esclavizador

del pueblo, - consultador de las leyes y fomentador del comunismo en el Continente; o se reconoce a un régimen diametralmente opuesto: el régimen del derecho y de la justicia; de la concordia continental, de la democracia y de la justicia social; del que enaltece los derechos del hombre hasta hacer de ellos un inviolable culto; del que estatuye la solidaridad continental y el respeto a los pueblos como un axioma sagrado. Magnífica oportunidad que la hora presente ofrece a los gobiernos de los países civilizados para reafirmar su fe en las doctrinas democráticas y para ejercitar el derecho inalienable de escoger entre el bien y el mal, entre el derecho y la injusticia; entre la civilización y la barbarie, entre la amistad abierta y la enemistad discreta; entre la impudicia política y el pudor jurídico; entre el comunismo disolvente y la democracia institucional.

Declaramos solennemente una vez más nuestro esencial principio que nos ha llevado a la lucha: no combatimos a un hombre, ni a un grupo de hombres, sino a un régimen que, arrancando de inconfesable origen, tiende a consolidar en Guatemala la más trágica de todas las dictaduras: la dictadura comunista. De ahí que el cambio intempestivo del llamado Presidente de nuestro país, previamente desconocido por nosotros, no sea más que un incidente: estamos y seguiremos en pie hasta no ver ruidos de la Patria ese estado de cosas negador de nuestras tradiciones, corruptor de la vida social, profanador de nuestra fé cristiana y subvertor de la conciencia colectiva. El mismo Carlos Enrique Díaz nos ha dado la clave de la batalla y señalado el camino de la pelea: al usurpar el gobierno al ya usurpador Jacobo Arbenz, señaló que es su propósito continuar la política gubernamental de los regímenes llamados de la revolución que tanto llanto y tanta sangre ha costado al pueblo de Guatemala. Indicó también Carlos Enrique Díaz que contará con el apoyo de los frentes Populares y del Partido Comunista, facilitándonos, con tan desvergonzados detalles, el camino de la victoria. Hemos, en consecuencia, de seguir en la

guerra hasta en tanto que no veamos libre a Guatemala de la canalla que la escarnece y la deshonra y hasta en tanto que no instauremos la paz creadora engendrada por la Cruzada de la Libertad. Hemos de continuar en la lucha, bajo las estrellas, hasta raer a los traidores y hasta exterminar definitivamente el comunismo ateo, mediante la expulsión de los malos guatemaltecos que han destruido nuestra economía, nuestras instituciones sociales y que han atentado contra la espiritualidad del pueblo, propiciando el odio y la destrucción, socavando a la familia, rompiendo la unidad nacional y profanando los símbolos patrios.

El Gobierno Provisional de Guatemala no puede dejarse sorprender por las falacias de los hombres avezados al delito y al fraude político. Hemos recogido la herencia de centenares de muertos; hemos contado una a una las lágrimas del pueblo, y seríamos traidores si a estas alturas, pactáramos con los hombres profesantes de la mentira, quebrantando el juramento formulado ante el altar de la Patria en el sentido de hacer de ella un paradigma de dignidad y de decencia.

Bajo los signos de DIOS, PATRIA y LIBERTAD, y al conjuro de las aspiraciones VERDAD, JUSTICIA y TRABAJO, seguiremos en la lucha hasta la vida o hasta la muerte. Si ello hiciéremos, recoja la Historia nuestros nombres y acójámonos Dios en el juicio de su tribunal inapelable; y si traicionámos a los muertos y a nuestros hijos, ellos se levanten contra nosotros algún día.

Guatemaltecos; este es nuestro testamento en esta hora de la Patria en peligro.

Chiquimula, 27 de Junio de 1954

CARLOS CASTILLO ARMAS.
Jefe del Gobierno.

Carlos Salazar.
Secretario de Relaciones
Exteriores.